

ECUADOR: INFORME DE LOS DERECHOS HUMANOS DE 2020

RESUMEN

Ecuador es una república constitucional multipartidista que cuenta con un presidente electo y una legislatura unicameral. En 2017 el electorado eligió al presidente Lenín Moreno, del partido gobernante Alianza PAIS (Patria Activa i Soberana), y escogió a los miembros de la Asamblea Nacional en elecciones que, en términos generales, fueron libres e imparciales.

La Policía Nacional mantiene la seguridad interna y hace cumplir las leyes, y está bajo la autoridad del Ministerio de Gobierno. Las fuerzas armadas están bajo la supervisión del Ministerio de Defensa Nacional y son responsables de la seguridad externa. La policía y las fuerzas militares comparten la responsabilidad de proteger la frontera, y las fuerzas militares, además, poseen algunas responsabilidades en el ámbito de la seguridad interna. Por expreso mandato, las fuerzas armadas pueden complementar las operaciones policiales con el fin de mantener y controlar el orden público. Los agentes de migración son funcionarios civiles que dependen del Ministerio de Gobierno. Las autoridades civiles mantuvieron un control eficaz de las fuerzas de seguridad. Los miembros de las fuerzas de seguridad presuntamente cometieron algunos abusos.

Entre los problemas notables de derechos humanos se incluyen los siguientes: Denuncias de tortura y abuso a manos de agentes de policía y guardias penitenciarios; condiciones carcelarias duras y potencialmente mortales; la existencia de leyes sobre difamación; serios casos de corrupción; falta de investigación y rendición de cuentas por la violencia contra mujeres y niños y el uso de trabajo infantil.

El gobierno tomó medidas para investigar y procesar a los funcionarios que presuntamente cometieron abusos de los derechos humanos.

Sección 1. Respeto de la integridad de la persona, incluido el derecho a no verse sometida a:

a. Privación arbitraria de la vida y otras ejecuciones ilícitas o motivadas por cuestiones políticas

Hubo informes de que el gobierno o sus agentes cometieron ejecuciones arbitrarias o extrajudiciales.

Las organizaciones de derechos humanos denunciaron un uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad, que probablemente fueron las responsables de varias de las 11 muertes notificadas por la Defensoría del Pueblo durante las protestas violentas de octubre de 2019 en contra de las reformas económicas impulsadas por el gobierno. Los funcionarios del Ministerio de Gobierno indicaron que solo ocho de las muertes estaban vinculadas a las manifestaciones y alegaron que las causas de muerte eran o bien a medidas de fuerza mayor, mientras la policía procuraba controlar a la multitud violenta, o a accidentes desvinculados al accionar de la policía. La organización no gubernamental (ONG) Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos y otras ONG informaron que, al 17 de agosto, la Fiscalía General del Estado no había realizado avances considerables en las investigaciones de las muertes ocurridas durante las manifestaciones. A finales del año, las investigaciones penales de toda la gama de delitos cometidos durante las semanas que duró la violencia organizada (saqueos, incendios intencionales, ataques a instituciones y empleados públicos) que acompañaron las protestas políticas no habían registrado avances notables.

En diciembre de 2019, la Corte Provincial de Justicia de Imbabura revocó la sentencia de junio de 2019 del oficial de policía David Velasteguí por “extralimitación en la ejecución de un acto de servicio”. En 2018, Velasteguí mató de un disparo al afroecuatoriano Andrés Padilla durante un altercado. El tribunal, al revertir el fallo, determinó que la vida de Velasteguí se encontraba en latente peligro y justificó que había hecho uso de su arma de dotación en legítima defensa. Además, el tribunal dictaminó que no hubo “intencionalidad vengativa ni planeamiento de la muerte Padilla” ni tampoco “responsabilidad penal en el acusado dado que la muerte no sucedió como consecuencia de un acto de extralimitación de funciones”. La familia de Padilla apeló el fallo y, al 19 de octubre, seguía pendiente el dictamen de la apelación.

b. Desaparición

No hubo informes sobre desapariciones causadas por las autoridades del gobierno o en su nombre.

El 14 de agosto, después de que la Corte Nacional de Justicia condenara a los exoficiales de inteligencia Raúl Chicaiza y Jessica Falcón a un año de prisión por el secuestro en 2012 en Bogotá, Colombia, del legislador de la oposición Fernando Balda, el tribunal dictaminó que funcionarios del gobierno utilizaron fondos públicos para orquestar el secuestro de Balda. El tribunal declaró al exdirector de

inteligencia Pablo Romero culpable de planear el secuestro bajo las órdenes del expresidente Rafael Correa, quien también fue acusado pero permaneció en Bélgica a pesar de las solicitudes de extradición. El pedido de extradición seguía en trámite a fecha 27 de octubre.

c. Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes

Si bien la constitución y la ley prohíben la tortura y prácticas análogas de intimidación y castigo, se informó que agentes de la policía y guardias de prisiones torturaron y abusaron de presos y sospechosos.

En dos casos emanados de arrestos vinculados a las manifestaciones violentas de octubre de 2019, las víctimas denunciaron ante ONG y organizaciones internacionales supuestos secuestros policiales y torturas u otros tratos degradantes durante los interrogatorios policiales. Activistas de derechos humanos afirmaron que, al 17 de agosto, las autoridades no habían investigado estas denuncias. El 14 de enero, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó un informe preliminar de su visita patrocinada por el Estado en octubre de 2019 sobre los abusos denunciados en relación con las manifestaciones de 2019. Numerosas personas detenidas afirmaron que habían sido agredidas por las autoridades con amenazas verbales, golpes con puños y porras metálicas y obligadas a realizar ejercicios físicos. La CIDH señaló que en algunos casos las autoridades judiciales no habrían registrado las señales físicas presentadas por las víctimas.

Organizaciones locales de derechos humanos informaron que la tortura continuó ocurriendo en las prisiones, especialmente en la cárcel de Turi, provincia de Azuay. El 27 de febrero, el fiscal del Azuay, Leonardo Amoroso, declaró que, contrariamente a las versiones oficiales que afirmaban que el 20 de febrero seis presos se habían suicidado en la cárcel, un informe forense (que indicaba que un preso tenía reventado el hígado) sugería que los reos podrían haber muerto como resultado de la tortura, pero no especuló sobre quién podría haber sido el responsable de las muertes. Al 27 de octubre, seguía pendiente una solicitud de investigación del caso presentada por las organizaciones de derechos humanos ante la Defensoría del Pueblo.

El 13 de octubre, los medios de comunicación informaron que una agente de policía de Durán, provincia del Guayas, había agredido a una vendedora informal con discapacidad, que estaba amarrada a un poste, pegándole en las nalgas mientras los observadores se burlaban de ella y le echaban agua en la cabeza. La agente infractora fue separada de la institución ese mismo día. El 14 de octubre, la

Fiscalía inició una investigación y detuvo a otros dos sospechosos implicados en el incidente.

La Dirección de Asuntos Internos de la Policía Nacional investiga si las ejecuciones a mano de la policía son justificables y puede remitir los casos a la Fiscalía General para que los procese. Una unidad de inteligencia de las fuerzas armadas tiene un papel similar al de la Dirección de Asuntos Internos de la Policía Nacional. La ley dispone que la Fiscalía General debe participar en todas las investigaciones de abusos de derechos humanos, incluidas las ejecuciones ilícitas y las desapariciones forzadas. Si bien la Dirección de Asuntos Internos de la Policía Nacional fue concebida para investigar las denuncias de abusos policiales, los defensores de los derechos humanos informaron de que estas unidades a menudo no investigaban a fondo. Los activistas afirmaron que era difícil dar seguimiento a las denuncias de abusos por la alta rotación de personal en la Dirección de Asuntos Internos.

Pese a que la impunidad no fue un problema significativo en las fuerzas de seguridad, algunas ONG de derechos humanos y grupos de la sociedad civil informaron que la falta de enjuiciamiento de los agentes de policía que presuntamente habían ejercido uso excesivo de la fuerza contra los manifestantes durante las protestas de octubre de 2019 podía interpretarse como impunidad. El gobierno no anunció que adoptaría más medidas para abordar la preocupación pública general por los presuntos abusos de derechos humanos cometidos durante las protestas de octubre de 2019.

Condiciones de las cárceles y los centros de detención

Las condiciones en las cárceles eran duras y potencialmente mortales debido a violencia de pandillas, corrupción oficial, escasez de alimentos, gran hacinamiento, hostigamiento por parte de los guardias de seguridad contra presos y visitantes, abuso físico y sexual y condiciones sanitarias y atención médica inadecuadas.

Condiciones físicas: Las cárceles siguieron estando hacinadas a pesar de los esfuerzos por atenuar el problema. Las autoridades comunicaron una reducción del hacinamiento total de las cárceles del 36% a finales de 2019 al 28% al 1 de junio, tras liberar a 1.525 reclusos entre el 1 de abril y el 1 de junio en respuesta a las preocupaciones de contagio por la COVID-19. Una ONG de derechos humanos informó que las condiciones carcelarias solían ser mejores para las reclusas debido a su menor densidad de población.

Por ley, los menores no pueden ser juzgados como adultos, y las personas condenadas antes de alcanzar la mayoría de edad cumplen toda su condena en cárceles de menores. En mayo de 2019, el diario El Comercio informó que el 40% de la población de los 11 centros para menores infractores eran menores que debían alcanzar la mayoría de edad durante su condena. Organizaciones de derechos humanos informaron que ningún menor estaba alojado en cárceles para adultos.

Los medios de comunicación documentaron 22 muertes violentas en las cárceles de todo el país hasta el 20 de agosto. El personal carcelario y las organizaciones de derechos humanos coincidieron en que la mayoría de las muertes violentas en las cárceles se debían a la tensión entre las pandillas vinculadas a cárceles de la droga. El 3 de agosto, un enfrentamiento entre pandillas penitenciarias armadas dejó un saldo de 11 reclusos muertos (entre ellos dos que murieron incinerados) y 20 heridos en la Penitenciaría del Litoral de Guayaquil. El 11 de agosto, una riña entre pandillas en el pabellón de máxima seguridad del Centro de Rehabilitación Social de Lacatunga, provincia de Cotopaxi, dejó dos reclusos muertos y cinco heridos. Una ONG denunció que las organizaciones delictivas que operan dentro y fuera de las cárceles intimidan al personal penitenciario tanto cuando está de servicio como cuando no.

El 8 de agosto, el ciudadano israelí Shy Dahan (encarcelado por presuntos vínculos a la corrupción para adquirir insumos médicos y kits de pruebas fraudulentas de COVID-19 en una trama que presuntamente involucraba al expresidente Abdalá Bucaram) apareció muerto en su celda de la Penitenciaría del Litoral. El 1 de octubre, los medios de comunicación informaron que el director de la Penitenciaría del Litoral, Héctor Vivar, había sido detenido por su presunta participación en un plan de soborno en el que exigía 30.000 dólares a cambio de la protección y la seguridad de Dahan.

El 2 de septiembre, siete presos fueron condenados a un total de 46 años adicionales de prisión por el secuestro y asesinato, por decapitación e incineración, de un compañero de prisión el 11 de junio en el Centro de Rehabilitación Social regional zona 8 de la provincia del Guayas.

El 11 de mayo, el presidente Moreno declaró el estado de emergencia para el sistema penitenciario nacional para hacer frente a la escalada de violencia en las cárceles, similar a una declaración de mayo de 2019. Además, el gobierno ordenó la presencia de policías dentro de los centros penitenciarios y de personal militar en el perímetro de seguridad y los puntos de control de entrada de las cárceles. Al 27

de octubre, el estado de emergencia seguía vigente. Durante el estado de emergencia, el gobierno volvió a clasificar a los reclusos y los separó en los centros según los niveles de amenaza asignados.

El acceso y la calidad de los alimentos, el agua potable y caliente, la calefacción, el saneamiento y la atención médica eran insuficientes. Los funcionarios verificaron que los presos no tenían acceso seguro y permanente a alimentos sanos. En 2018, funcionarios del gobierno detectaron un deterioro de los sistemas de agua en las cárceles, con notables dificultades de acceso a agua potable, especialmente en el Centro de Rehabilitación de Latacunga, y estos problemas continuaban. En algunos establecimientos carcelarios las medidas sanitarias bastaban solo para brindar atención de emergencia. El 20 de junio, los funcionarios penitenciarios nacionales notificaron que en los centros de detención nacionales entre los reclusos había 699 contagios y 10 muertos por COVID-19. Los reclusos señalaron que en las cárceles las medidas de protección y aislamiento para evitar los contagios por COVID-19 variaban y, en general, eran insuficientes.

Una ONG informó que las autoridades carcelarias, incluido el personal médico, no solían examinar a los internos a fondo ni separaban a los reclusos con discapacidades mentales y físicas del resto de la población carcelaria. El 26 de junio, el presidente Moreno firmó un decreto por el que se indultaba a las personas con discapacidades y se conmutaban sus penas de prisión. Los reclusos indultados debían cumplir con medidas alternativas, como el servicio comunitario y la comparecencia personal ante un juez dos veces al mes.

Administración: A veces, las autoridades investigaron denuncias verosímiles de maltrato en las cárceles.

El 15 de marzo, el presidente Moreno ordenó la suspensión de las visitas a los reclusos y redujo las actividades recreativas en todos los centros penitenciarios como medida para evitar el contagio de la COVID-19. Algunas organizaciones de derechos humanos siguieron denunciando que los pocos visitantes a los que se les permitía el ingreso antes de la pandemia sufrían tratos degradantes al ingresar en las instalaciones carcelarias, como tener que desnudarse, dejar que les iluminaran los genitales con linternas y verse obligadas a saltar desnudas. Estos tratos disuadieron a familiares y funcionarios religiosos de visitar las cárceles. Una ONG informó que el acceso a los reclusos había sido limitado durante la declaración de emergencia sanitaria de mayo a agosto de 2019, ya que los reclusos seguían viviendo en un aislamiento casi total de sus familiares.

Vigilancia independiente: Algunos representantes de la sociedad civil siguieron denunciando restricciones a la vigilancia por parte de observadores independientes de las ONG. Según la ONG Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH), las autoridades no respondieron a numerosas solicitudes de observadores independientes de visitar las cárceles. Los funcionarios carcelarios explicaron que la seguridad de esos grupos de observadores no se podía garantizar, especialmente durante el estado de emergencia en el sistema penitenciario.

d. Arresto o detención arbitrarios

La ley prohíbe el arresto y la detención arbitrarios y consagra el derecho de toda persona de impugnar ante un tribunal la legalidad de su arresto o detención, pese a lo cual se informó que las autoridades provinciales y locales no siempre respetaban esas disposiciones. Según distintas ONG, se siguieron efectuando detenciones ilícitas.

Procedimientos de arresto y trato de los detenidos

La ley exige que las autoridades expidan órdenes de arresto específicas por escrito antes de efectuar una detención y un juez debe formular cargos por un delito penal específico contra un sospechoso dentro de las 24 horas siguientes a su arresto. En general, las autoridades respetaron este plazo, si bien en algunas provincias la detención inicial solía ser mucho más prolongada. Los detenidos tienen derecho a que se les informe de los cargos formulados en su contra. Conforme a la ley, si el informe de la investigación inicial es incriminatorio, el juez, a pedido del fiscal, puede ordenar la prisión preventiva. Hubo casos en que los jueces dispusieron la liberación de un detenido, a la espera de su juicio, a cambio del uso de brazaletes de tobillo.

Los detenidos tienen el derecho constitucional a un abogado. Quienes carecen de recursos para pagar esos servicios tienen derecho a solicitar un abogado de oficio de la Defensoría Pública. Pese a haber muchos de esos abogados disponibles, el alto número de casos y el tiempo limitado con que los mismos contaban para prepararse para la defensa siguieron siendo una desventaja durante los juicios.

Por ley, los detenidos tienen derecho a un acceso sin demoras a abogados y familiares, pero las ONG siguieron informando acerca de demoras según las circunstancias y la disposición de los tribunales locales y los guardias penitenciarios para hacer cumplir la ley.

Arresto arbitrario: Varias ONG y organizaciones internacionales denunciaron que las fuerzas de seguridad detuvieron arbitrariamente a manifestantes durante las manifestaciones violentas de octubre de 2019 en contra del gobierno. En su informe del 14 de enero, la CIDH destacó que la información recibida indicaba que “un gran número de estas detenciones presuntamente se habrían llevado a cabo de forma arbitraria o ilegal”, y subrayó la afirmación que formuló el Defensor del Pueblo en octubre de 2019 de que hasta un 76% de las 1.192 detenciones notificadas por el gobierno durante las manifestaciones fueron arbitrarias o ilegales.

Detención preventiva: La corrupción y la ineficiencia general de la judicatura causaron demoras en los juicios. No se impartió capacitación adecuada a la policía, los fiscales, los defensores públicos y los jueces. Por lo general, la detención preventiva no excedió la duración de la sentencia máxima para el presunto delito.

e. Denegación de juicio público imparcial

Si bien la constitución contempla una judicatura independiente, las presiones externas y la corrupción obstaculizaron el proceso judicial. Los expertos jurídicos, los colegios de abogados y las ONG informaron sobre la susceptibilidad de la judicatura al soborno a cambio de fallos favorables y de una resolución más rápida de los casos enjuiciados. Al 18 de septiembre no se disponía de información actualizada sobre la selección del reemplazo definitivo de los miembros del Consejo de la Judicatura, después de que en noviembre de 2019 se considerara que 23 de los 36 jueces evaluados no reunían los requisitos mínimos y fueran sustituidos de forma temporal por magistrados de tribunales inferiores nombrados por el Consejo.

El 29 de enero, seis exuniformados condenados por “paralizar un servicio público” durante una manifestación policial de 2010, conocida como 30-S, fueron liberados de la cárcel tras una apelación. Todos los agentes declararon que intentarían reintegrarse a la fuerza policial. El 29 de junio, otros cuatro expolicías condenados a 12 años de cárcel por el mismo incidente presentaron una apelación de la sentencia ante la Corte Nacional de Justicia. Los apelantes, tras cumplir casi seis años de condena, quedaron en libertad a la espera de la sentencia de la corte, que al 27 de octubre seguía pendiente.

Procedimientos judiciales

Las leyes estipulan el derecho a un juicio imparcial y público, pero hubo demoras frecuentes. La ley presume que el acusado es inocente mientras no se demuestre su culpabilidad. Estos tienen derecho a que se les informe sin dilación y en detalle sobre los cargos que se les formulan. Los imputados tienen derecho a consultar con un abogado, o a que se les nombre uno, y a apelar. Los acusados tienen derecho a servicios gratuitos de interpretación, pero algunos hicieron reclamos por la falta de intérprete en las audiencias judiciales. Asimismo, tienen derecho a contar con tiempo y recursos adecuados para preparar su defensa, aunque en la práctica esto no siempre se cumplió, y las demoras en la prestación de servicios de traducción dificultaron el proceso para algunos acusados extranjeros. Los extranjeros también solían enfrentar una barrera idiomática con sus defensores públicos, lo cual les restó posibilidades de presentar una defensa. Los acusados tienen derecho a estar presentes en su juicio. También pueden presentar pruebas y llamar a testigos, ampararse en el derecho a negarse a prestar testimonio autoinculpatorio y confrontar y conainterrogar a los testigos.

Los jueces supuestamente dictaron sentencias con mayor o menor rapidez debido a presiones políticas y, en algunos casos, por temor. Se informó acerca de demoras de hasta un año en la programación de algunos juicios.

Las reformas del sistema de justicia penal destinadas a reducir la congestión en los calendarios judiciales de casos penales produjeron procedimientos “simplificados” en las instancias previas al juicio, lo cual permitió una resolución de casos más veloz. Hubo presos que informaron que una vez que sus casos habían llegado a un tribunal superior tuvieron que esperar mucho tiempo para recibir las fechas de las audiencias preliminares.

El sistema judicial ordinario juzgó a la mayoría de los acusados, aunque algunos grupos indígenas juzgaron a sus miembros independientemente, de conformidad con las normas de sus propias comunidades por transgresiones ocurridas en territorio indígena, según lo previsto en la constitución.

El sistema judicial se ralentizó considerablemente debido a la pandemia de COVID-19, y todos los tribunales pasaron inicialmente a trabajar a distancia. Los abogados de los acusados se quejaron de que este formato interfería con su capacidad de representar adecuadamente a sus clientes y varios señalaron que las nuevas normas de procedimiento se aplicaban de manera incoherente y a veces arbitraria. Al mes de junio, algunos tribunales habían vuelto a las comparecencias en persona, pero los jueces que pertenecían a categorías demográficas o sanitarias de riesgo continuaron con la modalidad virtual.

Presos y detenidos políticos

No hubo informes de que hubiera presos o detenidos políticos.

El 30 de julio, la Asamblea Nacional aprobó una resolución que concedía la amnistía a 20 líderes indígenas acusados y condenados en 2015 por secuestro y extorsión tras participar en movilizaciones en contra del anterior gobierno de Correa. Además de ordenar la liberación inmediata de los cuatro líderes que seguían detenidos, por la resolución se eliminaron todos los antecedentes penales relacionados con los cargos, se revocaron las órdenes de captura pendientes contra cualquier persona y se extinguieron las medidas cautelares o penas alternativas a la prisión que se hubieran impuesto anteriormente. Las organizaciones de derechos humanos informaron que 150 manifestantes maltratados y detenidos seguían enfrentándose a procesos judiciales por los mismos presuntos actos de 2015.

Procedimientos y recursos judiciales civiles

Los juzgados civiles y el Tribunal Contencioso Administrativo, por lo general considerados independientes e imparciales, tramitan las demandas de indemnización por daños y perjuicios causados por violaciones de los derechos humanos, y también las demandas de cese inmediato de dichas violaciones. Las personas y las organizaciones pueden apelar las decisiones adversas ante los tribunales nacionales y ante los órganos regionales de derechos humanos.

f. Injerencia arbitraria o ilícita en la privacidad, la familia, el hogar o la correspondencia

La ley prohíbe tales actos, y no hubo informes de que el gobierno no hubiera respetado estas prohibiciones.

Sección 2. Respeto de las libertades civiles, incluidas las siguientes:

a. Libertad de expresión, incluida la libertad de prensa

La constitución consagra la libertad de expresión, incluida la de prensa, pero otras leyes restringen ese derecho. Algunos expertos advirtieron que las disposiciones restrictivas de la actividad periodística estipuladas en una ley de comunicación de 2013, reformada en febrero de 2019, seguían en vigor, incluido el artículo 5, que caracteriza a los medios de comunicación y las comunicaciones como un servicio

público (no un derecho), y una cláusula que exige que todos los periodistas tengan título universitario. También permanecieron en vigor cláusulas restrictivas estipuladas en otras leyes, como la penalización de opiniones al caracterizarlas de calumnia, que acarrea una pena de cárcel de entre seis meses y dos años.

Los activistas de derechos humanos señalaron que los toques de queda nacionales y las restricciones de desplazamiento que se impusieron durante las manifestaciones de octubre de 2019, y en vigor en distintos grados desde el 17 de marzo por la pandemia de COVID-19, que se habían concebido por motivos de salud y seguridad y públicas, en la práctica impusieron una serie de restricciones de facto a la libertad de expresión, a la libertad de reunión y asociación, y a la libertad de movimiento (véase la sección 2.b.).

Libertad de expresión: En general, las personas pudieron hablar de asuntos de interés general, tanto en público como en privado, sin sufrir represalias. La ley prohíbe a los ciudadanos proferir “expresiones en descrédito [en contra de otra persona]”, que se caracteriza como contravención de cuarta clase con pena privativa de la libertad de 15 a 30 días. No se informó que el gobierno hubiera invocado esta ley para limitar la libertad de expresión durante el año.

Libertad de prensa y medios de comunicación, inclusive la prensa en línea: La prensa independiente se mantuvo activa y expresó una amplia variedad de opiniones, incluidas críticas al gobierno.

Fundamedios, un grupo que vigila la libertad de expresión en el país, informó que, debido al impacto financiero de la pandemia de COVID-19, en julio las empresas de medios de comunicación públicos y privados hicieron recortes de personal, como periodistas, colaboradores y personal administrativo, entre otros. Según Fundamedios, la reducción de personal afectó negativamente la libertad de prensa ya que, como resultado de los recortes, disminuyeron las opiniones críticas del gobierno.

La ley limita la capacidad de los medios de comunicación de cubrir las elecciones durante el período oficial de campaña y no permite que haya cobertura en las 48 horas que preceden a una elección nacional. Un fallo de la Corte Constitucional afirmó el derecho de la prensa a realizar entrevistas y presentar informes especiales sobre candidatos y temas durante el período de campaña, pero conservó intactas las restricciones sobre la promoción “directa o indirecta” de candidatos u opiniones políticas específicas.

La ley tipifica el delito de incitar al “pánico financiero” y dispone una pena de cinco a siete años de cárcel para quien divulgue información falsa que alarme a la población y provoque el retiro masivo de depósitos de una institución financiera poniendo en peligro su estabilidad.

La ley dispone que los mensajes e informes del presidente y su gabinete que se difundan por televisión y radio se hagan de forma gratuita. Tras asumir el mando en 2017, el presidente Moreno redujo la duración requerida para las difusiones presidenciales a un programa semanal de 15 minutos, a diferencia de las tres a cuatro horas semanales que regían bajo su predecesor.

Con las reformas a la ley de comunicaciones de 2013 promulgadas en 2019 sobre las asignaciones del espectro se abordaron las preocupaciones anteriores sobre la posible asignación excesiva del espectro a los medios de comunicación estatales. Las reformas estipulan una redistribución de las frecuencias de radiodifusión a fin de que se dividan en partes iguales entre los medios de comunicación comunitarios (hasta el 34%) y los públicos y privados (hasta el 66% entre ambos tipos). Las cifras máximas que introduce la reforma están sujetas a la demanda y la disponibilidad. Las reformas limitan la asignación de radiofrecuencias al sector público a un máximo del 10% del espectro.

El 15 de mayo, la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (Arcotel) inició un concurso público para asignar 3.196 radiofrecuencias. Fundamedios y otros grupos de la sociedad civil criticaron el proceso de licitación por carecer de transparencia y permitir que un pequeño número de licitadores acumulara un número desproporcionado de frecuencias. Estos grupos señalaron que la posible aglomeración de frecuencias de radio bajo un solo dominio amenazaba la libertad de expresión al reinstalar la autocensura entre los medios de comunicación. El 18 de septiembre, la Asamblea Nacional inició una auditoría del proceso de licitación. El 5 de octubre, Xavier Aguirre, director de Arcotel, anunció que extendería el plazo de licitación por 25 días para verificar los requisitos e inhabilidades de los licitadores y examinar las consultas del gobierno y la sociedad civil sobre el proceso. El 13 de noviembre, Arcotel informó en su página web que el 70% de los participantes (de un total de 621) en la licitación de frecuencias radioeléctricas cumplía con todos los requisitos para obtener el título habilitante, que tiene una validez de 15 años. El 30% restante puede solicitar una segunda revisión de su solicitud.

Violencia y acoso: *Human Rights Watch* informó que la policía de Guayaquil recurrió a un aparente uso excesivo de la fuerza para disipar una manifestación

pacífica el 14 de mayo para protestar la respuesta del gobierno a la COVID-19 y los recortes presupuestarios en educación. Según Fundamedios, la policía agredió a dos periodistas del Diario Expreso y a un fotógrafo del CDH.

En un informe de diciembre de 2019, Fundamedios afirmó que las manifestaciones violentas en contra del gobierno en octubre de 2019 provocaron un resurgimiento de la estigmatización y el discurso de odio contra los periodistas y los medios de comunicación que se habían vivido por última vez durante el gobierno del expresidente Correa. Este discurso se atribuyó ampliamente a los manifestantes y a sus partidarios, no al gobierno de Moreno. Frases como “prensa corrupta” y “prensa vendida” se reprodujeron con frecuencia en varios sectores y en las redes sociales durante las manifestaciones de octubre de 2019 y se prolongaron a lo largo de todo el año. Los ataques verbales infundieron “una desconfianza de la ciudadanía en los periodistas, en especial los que pertenecen a algunos medios de comunicación tradicionales”. Algunos periodistas indicaron que evitaban cubrir las manifestaciones con carga política por miedo a sufrir agresiones físicas, como se vio durante las manifestaciones de octubre de 2019.

Censura o restricción del contenido: Se informó que funcionarios del gobierno trataron de castigar a quienes publicaban notas críticas sobre el gobierno. Al 11 de agosto, Fundamedios había denunciado cinco posibles casos de censura que involucraban a funcionarios del gobierno. Si bien cuatro casos no implicaban acciones legales ni sanciones, en uno de ellos un funcionario del Consejo Provincial de Chimborazo presentó una denuncia penal contra dos periodistas por publicar un informe sobre actos de corrupción en Riobamba, capital de la provincia de Chimborazo.

El 2 de septiembre, la Corte Constitucional anuló un fallo de 2012 del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), que multó a la revista de noticias Vistazo con 80 mil dólares por publicar un editorial en que rechazaba el referendo impulsado por el gobierno en 2011 sobre las reformas propuestas al Poder Judicial, tres días antes de que se celebrara la votación. Tras fallar inicialmente a favor de la revista, afirmando que un editorial de opinión no puede considerarse “propaganda política”, el TCE anuló su decisión después de que el entonces presidente Correa sustituyera a los jueces del TCE. En su sentencia de septiembre, la Corte Constitucional dictaminó que el TCE era responsable de violar los derechos al debido proceso y a la libertad de expresión. Además, en el fallo se exhortó a los funcionarios del gobierno a recalcar la libertad de expresión en el proceso electoral. Un representante legal de Vistazo dijo a los medios locales: “Esta

decisión sienta un precedente de que los medios de comunicación deben expresar sus opiniones sin autocensura”.

La ley también impone cupos de contenido local a los medios de comunicación, incluido el requisito de que un mínimo del 60% del contenido en televisión y 50% en la radio sean de producción nacional. Asimismo, exige que la publicidad sea de producción nacional y prohíbe toda publicidad que un juez considere sexista, racista o discriminatoria. Además, el Ministerio de Salud Pública debe aprobar toda la publicidad de alimentos y productos para la salud.

Leyes sobre difamación: La difamación es un delito penal según la ley y se la sanciona con penas de hasta tres años de cárcel, además de multas. La ley asigna responsabilidad a los dueños de los medios de comunicación, en cuanto a los artículos de opinión o declaraciones de los periodistas u otras personas, incluidos los lectores, que utilizan sus plataformas mediáticas. Las reformas de febrero de 2019 a la Ley Orgánica de Comunicación de 2013 derogaron la prohibición del “linchamiento mediático”, entendiéndose por tal “la difusión de información concertada y reiterativa, de manera directa o por terceros, a través de los medios de comunicación, destinada a desprestigiar a una persona natural o jurídica o reducir su credibilidad pública”. Las organizaciones de vigilancia informaron que, al 17 de agosto, el gobierno no había utilizado las leyes de difamación contra los periodistas.

El 13 de julio, un abogado que representaba al conglomerado brasileño Odebrecht demandó a Fernando Villavicencio, periodista de investigación y director del portal digital Periodismo de Investigación, por difamación, después de que Villavicencio publicara en agosto de 2019 un informe sobre el regreso de la empresa privada al país en 2010 tras su expulsión en 2008. En el informe se alegaba que la empresa había pagado 20 millones de dólares al gobierno de Correa a cambio de generosas condiciones de condonación de la deuda y el cese de las investigaciones. El gobierno de Moreno prohibió que Odebrecht continuara operando en el país en enero de 2019, semanas después de que funcionarios de Odebrecht confesaran a las autoridades estadounidenses que habían orquestado una red de corrupción internacional durante muchos años.

En 2019 la Corte Constitucional revocó una sentencia de 2012 contra el diario La Hora. La Secretaría Nacional de Administración Pública argumentó con éxito en 2012 que el medio había publicado información sobre los gastos de propaganda del gobierno de ese entonces, que perjudicaba la reputación de la secretaria. La decisión de la corte puso de relieve que solamente los seres humanos, no las

instituciones, tienen derechos. Los peritos jurídicos argumentaron que la decisión sienta un precedente a favor de la libertad de expresión.

Actos para ampliar la libertad de expresión, incluida la de prensa: El Comité para la Protección de los Periodistas, integrado por el gobierno y la sociedad civil instituido en 2019, volvió a reunirse el 11 de agosto para debatir formas de proteger a los periodistas de las amenazas por informar sobre la corrupción y otros temas delicados. El comité acordó incorporar a representantes de la Fiscalía General y del Consejo de la Judicatura y, si procede, activar la intervención policial para brindar protección y apoyo a los periodistas afectados.

Libertad de acceso a internet

El gobierno no restringió ni interrumpió el acceso a internet, pero las organizaciones de derechos humanos y los medios de comunicación denunciaron casos de censura de contenidos en línea.

El 4 de febrero, un empleado de Presidencia denunció al medio digital 4 Pelagatos por presuntas violaciones de la propiedad intelectual por utilizar una fotografía del presidente Moreno, tomada por el gobierno, en un artículo en línea. Según la denuncia, 4 Pelagatos violó la propiedad intelectual del gobierno al utilizar una imagen oficial sin autorización. Ese mismo día, la Secretaría de Comunicación declaró que el empleado de Presidencia había sido despedido por “tomar decisiones sin autorización”. En el comunicado de prensa se reiteraba el respeto del gobierno a la libertad de expresión, pero se justificaban las restricciones al uso de imágenes sobre la base de las normas de derechos de autor: “El Gobierno Nacional, en su lucha contra la desinformación [...] tiene derechos de autor sobre imágenes e información que genera”.

Una norma gubernamental exige que los proveedores de servicios de internet cumplan con todos los pedidos de información que les formule el superintendente de telecomunicaciones, permitiendo el acceso a las direcciones e información de los clientes sin orden judicial. La ley hace responsable a un medio de prensa por los comentarios en línea de sus lectores si no ha establecido mecanismos para que los autores de los comentarios registren sus datos personales (incluido el número de su cédula de identidad nacional) o no ha creado un sistema para borrar comentarios ofensivos. La ley también prohíbe que los medios usen información obtenida de las redes sociales, a menos que puedan verificar quién es el autor de la información.

Libertad académica y actos culturales

El gobierno no impuso restricciones a la libertad académica ni a los actos culturales.

b. Libertades de reunión y de asociación pacíficas

La ley contempla las libertades de reunión pacífica y de asociación, y el gobierno respetó en general estos derechos, aunque impuso algunas restricciones debido a la pandemia de COVID-19.

Los defensores de los derechos humanos informaron que el estado de excepción que se declaró el 17 de marzo para controlar la propagación de la COVID-19 contenía restricciones de facto a la libertad de reunión y asociación, así como a la libertad de circulación. El gobierno instituyó toques de queda en todo el país, efectivos los siete días de la semana. Las restricciones a la libertad de reunión y asociación limitaron el número de personas en lugares públicos y residencias privadas. El presidente Moreno prorrogó el estado de excepción en incrementos de 60 y 30 días hasta el 12 de septiembre. En un dictamen del 25 de agosto, la Corte Constitucional prohibió al presidente renovar el estado de excepción utilizando los mismos motivos que las solicitudes anteriores y dictaminó que el estado de excepción no puede “extenderse de manera indefinida mediante decretos que prorroguen el estado o excepción o que declaren otros nuevos”, ya que el Estado debía transitar hacia una condición que permitiera “el goce y ejercicio de los derechos constitucionales que se encuentran amenazados [bajo el estado de excepción]”.

Libertad de reunión pacífica

La ley estipula la libertad de reunión pacífica y, en general, el gobierno respetó este derecho. Para celebrar manifestaciones públicas se necesitan permisos previos de las autoridades, que generalmente se concedieron.

Human Rights Watch, la Alianza por los Derechos Humanos y el CDH informaron que la policía de Guayaquil presuntamente detuvo de forma arbitraria a cuatro manifestantes durante una protesta el 14 de mayo en la que la policía golpeó e hirió a los manifestantes. Según el CDH, en el informe policial constaba que los cuatro detenidos habían agredido verbalmente a los agentes de policía. En una audiencia judicial celebrada el 15 de mayo, un juez dictaminó que la policía carecía de

pruebas suficientes de que los manifestantes detenidos hubieran cometido un delito y ordenó que quedaran en libertad.

El 17 de junio, la Corte Constitucional dispuso la suspensión del Acuerdo Ministerial 179, emitido el 26 de mayo por el ministro de Defensa, en respuesta a denuncias de varias organizaciones de derechos humanos que argumentaban que era innecesario. El acuerdo regulaba un protocolo del 29 de mayo sobre el uso de la fuerza formulado en respuesta a las visitas patrocinadas por el Estado de misiones de las Naciones Unidas y de la CIDH, que concluyeron que las fuerzas de seguridad del Estado hicieron un uso excesivo de la fuerza para contener las manifestaciones violentas en contra del gobierno en octubre de 2019. Las ONG que impugnaron el protocolo argumentaron que la constitución otorga la facultad de restablecer el orden público únicamente a la policía, no a las fuerzas armadas. Afirmaron que el papel de las fuerzas armadas se limita a proteger la soberanía nacional y la integridad territorial. Además, señalaron que el protocolo, tal y como está redactado, supone una amenaza al pleno ejercicio de los derechos humanos ya que otorga al Ejército un amplio margen de maniobra para intervenir en manifestaciones futuras.

Libertad de asociación

La ley establece la libertad de asociación y, en general, el gobierno respetó este derecho. Los representantes de la sociedad civil observaron que algunas políticas promulgadas durante el gobierno de Correa seguían vigentes y podrían permitir que el gobierno disuelva organizaciones independientes por motivos poco claros.

c. Libertad de culto

Véase el informe del Departamento de Estado sobre la libertad de culto en el mundo (*International Religious Freedom Report*) en <https://www.state.gov/religiousfreedomreport/>.

d. Libertad de circulación

Las leyes establecen la libertad de circular libremente dentro del país, viajar al extranjero, emigrar y repatriarse y, en general, el gobierno respetó esos derechos.

e. Condición y trato de los desplazados internos

No corresponde.

f. Protección de refugiados

El gobierno colaboró de manera limitada con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), la Organización Internacional para las Migraciones y otras organizaciones humanitarias en lo que respecta a dar protección y ayuda a los migrantes, los refugiados, los solicitantes de asilo, las personas apátridas y otras personas vulnerables de interés. Además, la ley codifica las protecciones que la constitución garantiza a los migrantes; promueve la protección de los refugiados y solicitantes de asilo; y establece disposiciones, como el tratamiento equitativo de los migrantes ante la ley, la no devolución y la no tipificación de la migración irregular como delito.

Maltrato de migrantes, refugiados y personas apátridas: Los migrantes y los refugiados, especialmente las mujeres y los niños, fueron víctimas ocasionales de actos de violencia sexual y de género. El ACNUR y ONG locales informaron que las mujeres y niños refugiados estaban expuestos a actos de violencia y trata de personas con fines de trata sexual y trabajo forzoso. Informaron también que hubo reclutamiento forzoso de adolescentes en la frontera norte, particularmente por parte de pandillas de delincuencia organizada que operaban también en Colombia, para hacerlos partícipes de actividades delictivas, como narcotráfico y robos. Si bien las autoridades gubernamentales brindaron protección básica para las poblaciones vulnerables, la afluencia de migrantes y refugiados en el transcurso del año siguieron siendo una pesada carga sobre la capacidad del gobierno de abordar y prevenir el maltrato de migrantes y refugiados.

Acceso a asilo: La ley dispone la concesión de asilo o de la condición de refugiado y el gobierno ha establecido un sistema para brindar protección a los refugiados.

Tras la institución de un requisito de entrada con visa en agosto de 2019, un número significativo de ciudadanos venezolanos comenzó a ingresar por puntos de cruce fronterizo informales. Algunas organizaciones internacionales manifestaron preocupación por que el aumento del número de cruces fronterizos informales colocaba a más migrantes en condiciones de vulnerabilidad. También expresaron preocupación por que la nueva política inicialmente no contemplaba excepciones a los requisitos de visa para algunas poblaciones vulnerables. Las organizaciones internacionales informaron que hubo un aumento de los solicitantes de asilo colombianos y venezolanos durante el año.

Acceso a servicios básicos: La ley estipula el acceso a servicios de educación, atención de salud y otros para todas las personas, independientemente de su condición jurídica. Según las agencias de las Naciones Unidas y algunas ONG, los refugiados sufrían discriminación en materia de empleo y vivienda. Los refugiados reconocidos como tales recibieron cédulas de identificación nacionales que les facilitaron el acceso a servicios de educación, empleo, bancarios y otros servicios públicos. En virtud de un convenio suscrito en 2016 entre el ACNUR y el Registro Civil, el primero puede proporcionar ayuda financiera a los refugiados que no pueden pagar la comisión por la cédula de identificación ni los gastos de viaje a las tres ciudades donde se emiten dichas cédulas. El Registro Civil también exige una autorización del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana para la inscripción de los refugiados, y hubo quienes debieron regresar a dicho ministerio si la información en sus expedientes contenía errores.

Soluciones duraderas: El gobierno aceptó a los refugiados para su reasentamiento y les ofreció la naturalización; no obstante, la discriminación y el acceso limitado al empleo formal y a la vivienda afectaron la capacidad de los refugiados de asimilarse a la población local.

Protección temporal: En septiembre de 2019, el gobierno implementó un trámite especial de visado humanitario para venezolanos. Al 31 de agosto, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana había emitido más de 40.000 visas humanitarias de dos años y continuaba pronunciándose sobre las solicitudes de visa presentadas antes de que concluyera el período de regularización especial el 13 de agosto.

Sección 3. Libertad de participar en el proceso político

La ley estipula el derecho de los ciudadanos a elegir su gobierno mediante elecciones periódicas, libres e imparciales, con voto secreto y basadas en el sufragio universal e igualitario. Un referendo nacional realizado en 2018 restableció los límites a la duración de los mandatos para todos los puestos electivos, incluido el del presidente, que se habían eliminado en 2015 por medio de una enmienda constitucional.

Elecciones y participación política

Elecciones recientes: En las elecciones nacionales celebradas en marzo de 2019, los ciudadanos eligieron a personas para cargos municipales, provinciales y parroquiales. Además, por primera vez los ciudadanos eligieron a siete miembros

para el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Los observadores internacionales provenientes de la Organización de los Estados Americanos, la Unión Interamericana de Organismos Electorales y misiones diplomáticas acreditadas concluyeron que el proceso electoral había sido ordenado y pacífico y no observaron ningún incidente de importancia.

Participación de la mujer y de miembros de grupos minoritarios: Ninguna ley limita la participación de la mujer ni de integrantes de las minorías en el proceso político, y ambos grupos participaron. El 3 de febrero entraron en vigor las reformas electorales que exigen que las mujeres encabecen al menos el 15% de las listas de candidatos de los partidos de todos los niveles en 2021, al menos el 30% en las elecciones locales previstas para 2023, y el 50% en 2025. La ley obliga a que todas las fórmulas presidenciales y vicepresidenciales incluyan al menos una mujer a partir de las elecciones nacionales de 2025.

En las elecciones de marzo de 2019, la proporción de candidatas fue baja para los cargos de alcalde (14,3%) y de prefectos provinciales (17,9%).

El acoso en las redes sociales a las mujeres políticas y candidatas continuó. La ONG local Participación Ciudadana encontró 4.381 *tuits* despectivos hacia 28 mujeres políticas y el gobierno en un estudio de *tuits* publicados entre diciembre de 2019 y junio. El estudio reveló un aumento significativo en los mensajes violentos hacia mujeres políticas en abril, cuando se recrudecieron las medidas de la cuarentena nacional por la COVID-19 y las mujeres encabezaban ministerios prominentes y fueron las portavoces más salientes del gobierno sobre el confinamiento. La directora de Participación Ciudadana, Ruth Hidalgo, declaró que la mayoría de los ataques se centraban en la apariencia de las mujeres y en los roles históricos que la sociedad considera que deben mantener. Agregó que este tipo de mensajes desanimaban a las mujeres a participar en política.

Sección 4. Corrupción y falta de transparencia en el gobierno

La ley establece sanciones penales para los actos de corrupción cometidos por funcionarios y el gobierno tomó medidas para aplicar la ley de manera efectiva. Algunos funcionarios, especialmente en el nivel local, a veces incurrieron en prácticas corruptas con impunidad. Durante el año hubo numerosos informes sobre la corrupción gubernamental ocurrida durante la presidencia de Rafael Correa. Además, las denuncias por la especulación de precios en medicamentos y equipo de protección personal en los hospitales públicos en plena crisis sanitaria por la COVID-19 implicaron a funcionarios locales y nacionales.

Corrupción: El gobierno lanzó o prosiguió una multiplicidad de investigaciones, procedimientos judiciales y auditorías legislativas de funcionarios acusados de corrupción en relación con contratos del Estado y emprendimientos comerciales que llegaron a los niveles más altos del gobierno.

El 7 de abril, la Corte Nacional de Justicia condenó al expresidente Correa, al exvicepresidente Jorge Glas y a otros 16 funcionarios públicos y empresarios a ocho años de cárcel por cohecho en la trama de corrupción Sobornos, que financió ilícitamente al partido Alianza PAIS de Correa a cambio de contratos públicos entre 2012 y 2016. Otras dos ayudantes presidenciales condenadas recibieron sentencias reducidas de 19 y 38 meses, respectivamente, por haber cooperado en la investigación. Los jueces encontraron pruebas suficientes para demostrar que había una red delictiva de corrupción encabezada por Correa, aunque no tuviera un vínculo directo con los sobornos. El Tribunal de Casación de la Corte Nacional de Justicia confirmó el fallo el 7 de septiembre, y el 7 de octubre solicitó a Interpol que difundiera una nueva notificación roja para la detención de Correa y de otros 14 acusados que residen en el extranjero.

El 20 de mayo, el presidente Moreno anunció medidas para combatir la corrupción pública durante la pandemia de COVID-19 y en emergencias futuras. Moreno cedió a las crecientes demandas de disolver la Secretaría Anticorrupción, tras la publicación de una carta de la fiscal general y las declaraciones de los presidentes de la Corte Nacional y del Consejo de la Judicatura en que criticaban a la secretaría por interferir en las investigaciones de corrupción.

El 1 de junio, la fiscal general Diana Salazar Méndez anunció la formación de un grupo de trabajo multidisciplinario de 40 personas para investigar todas las denuncias de corrupción en el sector de la salud pública durante la crisis por la COVID-19 a nivel nacional, provincial y municipal. Argumentó que el grupo de trabajo era necesario para garantizar la imparcialidad de las investigaciones, ya que los fiscales locales a menudo sufrían presiones o tenían conflictos de intereses por sus lazos personales o familiares con los investigados. El 4 de junio, 17 personas, entre ellas el expresidente Abdalá Bucaram, fueron detenidas en la primera operación del grupo de trabajo. Al 27 de octubre, seguían pendientes los juicios de alto perfil de esas investigaciones, aunque recientemente se estaba investigando a funcionarios del gobierno, como la exsecretaria de Gestión de Riesgos y Emergencias, María Alexandra Ocles Padilla, y el exdirector del Instituto de Seguridad Social, Iván Granda Molina.

El 30 de enero, la Corte Nacional de Justicia condenó a la exvicepresidenta María Alejandra Vicuña a un año de cárcel por el delito de concusión. También se le ordenó pagar una multa de 173.118 dólares y entregar su casa.

Divulgación de información financiera: Los funcionarios públicos tienen la obligación de declarar sus participaciones financieras al asumir sus cargos y, si se les solicita, durante una investigación. Todos los organismos deben proporcionar información salarial mensualmente a través de su portal web. La constitución exige que los empleados públicos presenten una declaración jurada sobre su patrimonio neto al comienzo y al final de su gestión, incluidos sus activos y pasivos, así como una autorización para rescindir la confidencialidad de sus cuentas bancarias. Los funcionarios públicos no están obligados a presentar informes periódicos, salvo en el caso de los legisladores, quienes también deben presentar una declaración después de que transcurra la mitad del período para el cual fueron elegidos. Todas las declaraciones deben presentarse en línea a la Contraloría General del Estado, cuyo sitio web brinda información general sobre las declaraciones y contiene una sección en la que el público puede efectuar una búsqueda sobre funcionarios para verificar si han cumplido con el requisito de divulgar sus ingresos y activos. Para acceder a la totalidad de una declaración hay que presentar una solicitud especial y el contralor general del Estado tiene discreción para decidir si proporcionar o no dicha información. No hay sanciones penales ni administrativas por incumplimiento, pero el funcionario que no cumpla estos requisitos no podrá asumir su cargo.

Sección 5. Actitud del gobierno frente a la investigación internacional y no gubernamental de supuestos abusos de los derechos humanos

En general, los distintos grupos nacionales e internacionales de derechos humanos actuaron sin restricciones por parte del gobierno, e investigaron y publicaron sus conclusiones sobre casos de derechos humanos. Los funcionarios del gobierno a menudo les ofrecieron cooperación y se mostraron receptivos hacia sus puntos de vista.

Organismos gubernamentales de derechos humanos: La Defensoría del Pueblo es un organismo administrativa y financieramente independiente en el ámbito de la Función de Transparencia y Control Social del gobierno, centrado en los derechos humanos. Este organismo presentó casos regularmente a la Fiscalía General.

Sección 6. Discriminación, abusos sociales y trata de personas

Mujeres

Violación y violencia doméstica: La ley tipifica la violación de hombres o mujeres, incluidas la violación conyugal, la violación de pareja y la violencia doméstica. El gobierno hizo cumplir la ley, si bien a veces las víctimas se mostraban renuentes a denunciar esos delitos. La pena por violación puede llegar hasta los 22 años de cárcel. La ley incluye la violación conyugal dentro de los delitos contra la integridad sexual y reproductiva. La pena por violación seguida de muerte es de entre 22 y 26 años de cárcel. La violencia doméstica se castiga con penas de entre cuatro días y siete años de cárcel y una multa cuantiosa por “lesiones, dolor y sufrimiento” dependiendo de la gravedad del delito. Se hicieron cumplir las sanciones por violencia física, psicológica y sexual.

La ley establece reparaciones para las víctimas de violencia de género, pero también aboga por la reeducación de los agresores. Define la violación, incluidos la violación conyugal o el incesto, la prostitución forzosa, el acoso sexual y otras prácticas análogas como formas de violencia sexual. Asimismo, confiere a las víctimas el derecho a recibir medidas de protección inmediatas concebidas para prevenir o poner fin a la violencia, como vigilancia policial, alojamiento en refugios y programas de sensibilización para la víctima y su familia. En general, estas medidas reparadoras se aplicaron.

Según algunas organizaciones de derechos humanos, las víctimas en general se mostraban renuentes a formular cargos de violencia doméstica y el sistema judicial no contaba con suficiente personal para afrontar la carga de casos. Además, la cuarentena nacional por la COVID-19 dejó a las víctimas atrapadas con su agresor las 24 horas del día y sin poder llamar a las líneas de ayuda ni salir de sus casas para presentar denuncias formales. El 12 de abril, la secretaria de Derechos Humanos, Cecilia Chacón, declaró que las denuncias por delitos sexuales recibidas por la Fiscalía General habían disminuido de 300 por semana antes de la pandemia a solo 60 por semana desde entonces. Las organizaciones de derechos humanos y las ONG dijeron que el menor número de llamadas y denuncias era una señal de que las víctimas no estaban denunciando los incidentes de violencia de género.

Debido al descenso en el número de denuncias presentadas en persona ante las autoridades judiciales, en abril el gobierno amplió los servicios jurídicos en línea para las víctimas. No obstante, obstáculos como el analfabetismo digital, la falta de disponibilidad de internet en las zonas rurales y la falta de conocimiento general de los recursos tecnológicos limitaron la capacidad de las víctimas de obtener ayuda.

Los jueces no tenían capacitación especializada para lidiar con la violencia por motivos de género. Las organizaciones de derechos también informaron que los funcionarios de la Junta Cantonal de Protección de Derechos a veces disuadían a las víctimas de denunciar a sus agresores.

Según expertos locales, denunciar violaciones y otras formas de violencia siguió suponiendo un proceso traumático, especialmente para las mujeres menores de edad. Por ejemplo, una víctima de violación debe presentar una denuncia ante la Fiscalía General y someterse a evaluaciones ginecológicas similares a los kits de violación que utilizan los peritos médicos. Muchas personas no denunciaron casos de violación y agresión sexual por temor a represalias por parte del perpetrador o a la estigmatización social.

Acoso sexual: La ley criminaliza el acoso sexual y estipula penas de entre uno y cinco años de cárcel. La ley define el acoso sexual y otras prácticas análogas como formas de violencia sexual, y dispone que los jueces prohíban el contacto entre el agresor y su víctima para prevenir su revictimización e intimidación y, en general, se hizo cumplir la ley. A pesar de la prohibición legal de acoso sexual y de la aplicación de la ley por el gobierno, las organizaciones de defensa de los derechos de la mujer señalaron que se tiende a no denunciar los actos presuntos de acoso, en tanto que el acoso en lugares públicos siguió siendo una cosa común.

Coacción en el control de la población: No se informaron abortos forzosos ni esterilizaciones involuntarias de parte de las autoridades del gobierno.

Discriminación: La constitución otorga a las mujeres los mismos derechos y la misma condición jurídica que a los hombres. No obstante, hubo una discriminación prevaleciente contra las mujeres, particularmente en lo relativo a oportunidades económicas para las de más edad y las ubicadas en los estratos económicos más bajos. Algunas mujeres de negocios alegaron que las instituciones financieras a veces exigían a las clientas que obtuvieran también la firma de sus maridos para acceder a un préstamo.

Las agencias de Naciones Unidas y distintas ONG informaron que el personal médico femenino era discriminado y objeto de violencia, como agresiones físicas y verbales, por parte de sus parejas y familiares por asistir a pacientes con COVID-19. Según la información recopilada por ONU Mujeres y la ONG *CARE International*, las mujeres superaban en número a los hombres en la primera línea de defensa contra la COVID-19, en un campo médico que ya está compuesto en

dos tercios por mujeres, lo que hacía que estas fueran mucho más susceptibles a quedar expuestas a la COVID-19.

Menores de edad

Inscripción de nacimientos: La ciudadanía se obtiene por nacimiento en el país, por nacimiento en el extranjero de madre o padre ecuatorianos, o bien por nacionalización. Según informes de la prensa, las familias pertenecientes a grupos de origen étnico minoritario y las personas de recursos económicos limitados siguieron teniendo tasas de inscripción sustancialmente inferiores a las de otros grupos. Ocasionalmente, brigadas gubernamentales viajaron a zonas rurales alejadas para inscribir a familias y a personas con discapacidades. Si bien la ley prohíbe que las escuelas soliciten documentos de registro civil para que los niños puedan matricularse, algunas, mayormente las públicas, los siguieron exigiendo. Otros servicios gubernamentales, incluidos el pago de asistencia social y los servicios de atención primaria de salud gratuitos, requieren alguna forma de identificación.

Educación: La falta de escuelas en algunas zonas afectó específicamente a los niños indígenas y refugiados, que deben salvar grandes distancias para asistir a la escuela.

Maltrato infantil: La ley criminaliza el maltrato infantil y dispone penas de entre 30 días y 26 años de cárcel, dependiendo de la gravedad del maltrato.

El 1 de febrero, Ana Cristina Vera, directora de la ONG local Surkuna, estimó que seis de cada 10 violadores eran familiares directos y la mayoría de las víctimas tenían menos de 14 años. En 2019, la Fiscalía General afirmó que aproximadamente el 60% de las víctimas de violación eran niños, niñas y adolescentes.

En una sentencia del 14 de agosto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró al Estado culpable de la violencia sexual sufrida por Paola Guzmán Albarracín a manos del vicerrector de la escuela pública a la que asistía, lo que desencadenó el suicidio de Guzmán en 2002. En su sentencia, la corte ordenó varias medidas de reparación, entre ellas la indemnización económica a la familia de la víctima. El 15 de agosto, el presidente Moreno se comprometió a cumplir la sentencia de la corte y añadió: “Nuestra lucha para erradicar la violencia sexual en el sector educativo se mantiene firme desde el primer día de mi Gobierno”. En junio de 2019, los medios de prensa informaron que aproximadamente el 16% de

las 7.977 denuncias de delitos sexuales que había recibido el Ministerio de Educación entre 2014 y mayo de 2019 tenía como víctimas a menores de edad. Los docentes o las autoridades escolares fueron acusados como autores en el 25% de las denuncias.

Las ONG locales y el gobierno expresaron su preocupación por el abuso infantil y el infanticidio durante la cuarentena nacional por COVID-19 pero carecían de estadísticas nacionales específicas y comparativas. El Consejo de Protección de Derechos del gobierno municipal de Quito notificó 10 suicidios y siete casos de infanticidio, respectivamente, entre el 17 de marzo y el 13 de mayo. El Consejo declaró que los infanticidios en ese lapso fueron supuestamente cometidos por un familiar directo. La vicepresidenta del Consejo, Sybel Martínez, advirtió que la falta de estadísticas precisas sobre la violencia contra menores podría fomentar la impunidad. La Fiscalía General del Estado afirmó que, si bien rastreaba y difundía semanalmente las estadísticas de violencia intrafamiliar, carecía de datos históricos para delinear tendencias. A finales de agosto, la Secretaría de Derechos Humanos realizó una campaña de sensibilización pública dirigida a niños y adolescentes, con información sobre cómo acceder a los recursos disponibles para las posibles víctimas de violencia doméstica.

El acoso escolar continuó siendo un problema en las escuelas y se registró con creciente frecuencia en las redes sociales. No se contó con datos oficiales a nivel nacional sobre el acoso escolar pero los funcionarios locales de la provincia de Tungurahua notificaron que, al 15 de febrero, había habido 14 suicidios. Un representante del Ministerio de Educación local reconoció que el acoso escolar podría haber sido un factor en esos suicidios. El Plan Toda Una Vida implantado por el gobierno establece programas que abordan distintos tipos de violencia, incluido el acoso escolar. A lo largo del año, los gobiernos municipales y provinciales también lanzaron otras iniciativas para abordar el acoso escolar en las escuelas que estaban bajo su supervisión.

Matrimonio infantil, a edad temprana y forzado: La edad legal para contraer matrimonio es de 18 años. Hubo informes acerca de matrimonios a edad temprana y forzosos en las comunidades indígenas, particularmente en los casos de embarazo de menores como consecuencia de violación. Los líderes indígenas notificaron casos en los que los agresores sexuales compensaban la violencia con un pago o el intercambio de animales, pero en algunos casos las víctimas eran obligadas a casarse con sus agresores.

Explotación sexual de menores: La edad de consentimiento es de 14 años. La ley prohíbe la explotación sexual de menores, incluida la pornografía infantil, e impone penas de entre 22 y 26 años de cárcel. La pena por la explotación sexual de menores de 18 años con fines comerciales es de 13 a 16 años de cárcel. La trata de menores con fines sexuales siguió siendo un problema, pese a los esfuerzos del gobierno por hacer cumplir las leyes.

Menores desplazados: Las organizaciones humanitarias expresaron preocupación por el creciente número de refugiados y migrantes menores no acompañados que ingresaron de Colombia hasta que el gobierno cerró las fronteras el 17 de marzo en respuesta a la pandemia de COVID-19. A las organizaciones internacionales les siguió preocupando que los niños, niñas y adolescentes no acompañados fueran vulnerables a la explotación y la trata por parte de grupos delictivos.

Sustracción internacional de menores: El país es signatario del Convenio de La Haya de 1980 sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores. Véase el informe anual del Departamento de Estado sobre la sustracción internacional de menores por uno de sus padres (*Annual Report on International Parental Child Abduction*) en <https://travel.state.gov/content/travel/en/International-Parental-Child-Abduction/for-providers/legal-reports-and-data/reported-cases.html>.

Antisemitismo

Hay una comunidad judía pequeña, que comprende unas 250 familias en Quito y 82 en Guayaquil. Al 27 de octubre, la comunidad judía no había notificado ataques ni agresiones.

Trata de personas

Véase el informe del Departamento de Estado sobre la trata de personas (*Trafficking in Persons Report*) en <https://www.state.gov/trafficking-in-persons-report/>.

Personas con discapacidades

La ley prohíbe la discriminación de las personas con discapacidades físicas, sensoriales, intelectuales y mentales. El Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades supervisa las políticas gubernamentales referentes a las personas con discapacidades.

A pesar de que la ley hace obligatoria la facilitación del acceso a edificios y promueve la igualdad de acceso a la salud, la educación, la seguridad social, el empleo, el transporte y las comunicaciones para las personas con discapacidades, el gobierno no lo hizo cumplir plenamente.

El 13 de octubre, los medios de comunicación informaron que una agente de policía había agredido a una vendedora ambulante discapacitada pegándole en las nalgas mientras los observadores se burlaban (véase la sección 1.c.).

La ley otorga el derecho a recibir servicios de las instituciones de salud y a tener cobertura de seguro médico, así como el acceso y la inclusión en la educación y dispone un programa de becas y préstamos estudiantiles para las personas con discapacidades. Asimismo, otorga seguridad laboral para dichas personas y exige que el 4% de empleados en todas las empresas públicas y privadas que tengan más de 25 empleados corresponda a personas con discapacidades. Por otra parte, hace a la Defensoría del Pueblo responsable de dar seguimiento a las presuntas violaciones de los derechos de las personas con discapacidades y estipula una serie de multas y castigos por incumplimiento de la ley. El 11 de septiembre, los medios de comunicación informaron que la Defensoría del Pueblo había recibido denuncias de despidos ilegales de personas con discapacidades y había contabilizado unos 400 presuntos despidos de este tipo en el sector público durante la pandemia de COVID-19. La Inspectoría del Ministerio del Trabajo trató cada una de las denuncias individualmente y, al 23 de octubre, estaba investigando todas.

La ley también dispone que las autoridades electorales brinden a las personas con discapacidades acceso al sufragio y se lo faciliten.

Miembros de grupos minoritarios nacionales, raciales y étnicos

La constitución declara que el Estado es plurinacional y afirma el principio de no discriminación, al reconocer los derechos de las comunidades de indígenas, afroecuatorianos y montubios (un grupo étnico independiente conformado por personas de ascendencia mixta afroecuatoriana, indígena y española). También estipula políticas de discriminación positiva para asegurar la representación de las minorías.

En un informe de noviembre de 2019 del Consejo Nacional para la Igualdad de Pueblos y Nacionalidades se reiteró que persistían el racismo y la discriminación

de los pueblos indígenas y los afrodescendientes, a pesar de las políticas públicas que promovían la igualdad. En el informe se reiteró que las minorías étnicas seguían teniendo dificultades con las oportunidades educativas y laborales y a menudo ganaban menos que sus homólogos no indígenas. Según el último censo, de 2010, menos del 4% de la población indígena ingresó a la educación superior. En febrero de 2019, el mismo organismo informó que los grupos raciales minoritarios tenían menos acceso a puestos directivos y demás oportunidades profesionales.

Los afroecuatorianos, que según el censo de 2010 representaban un 7% de la población, sufrieron una discriminación generalizada, en especial en cuanto a oportunidades educativas y económicas. Las organizaciones de afroecuatorianos observaron que, pese a la ausencia de discriminación oficial, la discriminación social y los estereotipos en los medios de comunicación seguían traducéndose para ellos en barreras al empleo, la educación y la vivienda. La encuesta nacional sobre relaciones familiares y violencia de género contra las mujeres publicada en noviembre de 2019 reveló que las afroecuatorianas eran particularmente vulnerables a la violencia de género y al acoso basado en estereotipos raciales y sexuales.

Indígenas

No hubo informes sobre restricciones impuestas a las personas indígenas y sus instituciones en las decisiones que afectaban sus propiedades o su forma de vida. La ley otorga a las personas indígenas los mismos derechos civiles y políticos que a otros ciudadanos. La constitución fortalece los derechos de las personas indígenas y reconoce el kichwa y el shuar como “idiomas oficiales de relación intercultural”. Asimismo, otorga a las personas y comunidades indígenas el derecho a consulta previa, es decir, a participar en las decisiones sobre la explotación de recursos no renovables ubicados en sus tierras y que puedan afectar su cultura o su medio ambiente, pese a lo cual algunas organizaciones de derechos de las personas indígenas observaron que los actores de los sectores público y privado solieron hacer caso omiso de la consulta previa. La constitución también permite que las personas indígenas participen de los beneficios económicos de los proyectos de extracción de recursos naturales y reciban indemnización por cualquier daño que dichos proyectos ocasionen.

En caso de daño ambiental, la ley dispone la toma de medidas correctivas inmediatas por parte del gobierno y la restitución total por parte de la empresa responsable, aunque algunos organismos indígenas se quejaron de la falta de

consulta y de medidas correctivas. La ley reconoce los derechos de las comunidades indígenas a la propiedad comunitaria, si bien el proceso de titulación de tierras siguió siendo incompleto en algunas partes del país. En el referendo nacional de 2018 los votantes aprobaron dos enmiendas constitucionales de pertinencia para las comunidades indígenas, en virtud de las que se prohibió la minería en las zonas urbanas y protegidas y se limitó la perforación petrolera en el Parque Nacional Yasuní.

Un informe del 1 de junio realizado por varios grupos de vigilancia ambiental e indígena advirtió que debido a que el sector minero fue considerado de “importancia estratégica” durante la pandemia y un número desproporcionado de mineros indígenas fueron considerados empleados esenciales, las minas fueron “focos de contagio” y pusieron a las comunidades indígenas vecinas en grave riesgo de contagio de COVID-19. Aunque los casos y las muertes confirmados por COVID-19 entre las comunidades indígenas fueron inferiores a la media nacional, los líderes indígenas y las organizaciones internacionales afirmaron que las comunidades indígenas, al igual que otras comunidades rurales de bajos ingresos, eran especialmente vulnerables a los efectos ambientales, médicos y económicos de la pandemia. El 1 de julio, Amnistía Internacional se unió a dos agrupaciones indígenas locales, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador y la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana, para pedir al gobierno nacional que elaborara un plan de acción nacional para proteger a las comunidades indígenas.

En 2018, el Consejo Nacional para la Igualdad de Pueblos y Nacionalidades informó que casi el 23% de las mujeres indígenas estaba subempleada, el 36% correspondía a analfabetas y la participación política de la mujer indígena seguía rezagada con respecto al resto de la población.

En un informe de Amnistía Internacional de abril de 2019 se acusó al gobierno de falta de voluntad para brindar protección adecuada e investigar con seriedad los ataques y amenazas que sufrieron en 2018 las defensoras ambientales del Amazonas Patricia Gualinga, Nema Grefa, Salomé Aranda y Margoth Escobar. Algunas organizaciones de derechos humanos manifestaron preocupación ante las tácticas de intimidación usadas por fuentes no identificadas contra esas activistas, que comprendieron amenazas de muerte y agresiones físicas. El 12 de marzo, Amnistía Internacional informó que estas tácticas pretendían silenciar su activismo medioambiental y denunció la falta de avances en el caso.

Actos de violencia, tipificación y otros abusos sociales motivados por la orientación sexual y la identidad de género

El gobierno, al impulso de la Defensoría del Pueblo, se mostró en general receptivo a las inquietudes manifestadas por la comunidad de personas lesbianas, gais, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI). No obstante, varios grupos LGBTI señalaron que la policía y los fiscales no investigaban a fondo las muertes de personas pertenecientes a esos grupos, ni siquiera cuando se sospechaba que el homicidio había sido motivado por un sesgo anti-LGBTI.

Una ONG abocada a las personas LGBTI denunció el asesinato, el 28 de mayo, de Javier Viteri, presuntamente perpetrado por un conscripto en el cantón de Huaquillas. Viteri tenía una relación sentimental con el conscripto, que presuntamente fue el responsable de apuñalar a Viteri 89 veces en la cara y en la zona genital. El 9 de junio, la Defensoría del Pueblo instó “a las autoridades competentes, en especial a la Fiscalía General del Estado, a que las investigaciones pertinentes consideren los hechos expuestos como un delito de odio, de conformidad con la legislación penal”. Asimismo, exhortó a que los funcionarios encargados de las investigaciones “realicen su trabajo de forma imparcial, sin prejuicios ni estereotipos de género o por orientación sexual”. Representantes del colectivo LGBTI informaron que se había suspendido una audiencia preparatoria de juicio programada para el 26 de julio. A 27 de octubre, no se disponía de más información.

La constitución incluye el principio de no discriminación y establece el derecho de elegir la propia orientación sexual. La ley también prohíbe los delitos de odio, pero algunos activistas LGBTI afirmaron que, desde la codificación legal de los delitos de odio en 2008, no se habían producido condenas por este tipo de delitos. Aunque la ley prohíbe la discriminación por motivos de orientación sexual, las personas LGBTI seguían sufriendo discriminación por parte de entidades públicas y privadas, en especial en la educación, el empleo y el acceso a la atención médica. Las organizaciones LGBTI informaron que las personas transgénero sufrían más discriminación porque tenían más visibilidad.

Distintas personas LGBTI siguieron informando que el gobierno a veces les negaba su derecho a la igualdad de acceso a la instrucción formal. Los alumnos LGBTI, en particular los transgénero, a veces se veían disuadidos de asistir a las clases y eran más susceptibles a sufrir acoso escolar. Los activistas de derechos humanos afirmaron que el Ministerio de Educación y los administradores de las escuelas tardaban en responder a las denuncias. Las personas LGBTI que se

dedicaban al comercio sexual denunciaron situaciones de abuso, extorsión y maltrato por parte de las fuerzas de seguridad.

La ley prohíbe a las personas LGBTI de menos de 18 años cambiar el género en sus documentos de identidad, aún si cuentan con el consentimiento de sus padres. En julio de 2019, una ONG abocada a las personas LGBTI informó que, en 2017, 15 escuelas se habían rehusado a inscribir a una menor de edad transgénero con el nombre y género que había escogido. Sus padres iniciaron un juicio en el que pedían que los funcionarios le permitieran cambiar su nombre y género en sus documentos de identidad para poner fin a la discriminación en su contra. El Registro Civil permitió esos cambios en su cédula de identidad en 2018. La ONG Fundación Ecuatoriana Equidad informó que tras ello los padres elevaron una petición a la Corte Constitucional para que determinara la edad a la que las personas transgénero menores de edad podrán cambiar su información de identidad. Al 27 de octubre, la Corte aún no se había pronunciado al respecto.

Las organizaciones abocadas a personas LGBTI y el gobierno no informaron que hubiera centros de tratamiento privados para internar a las personas LGBTI en contra de su voluntad con el fin de “curarlas” o “deshomosexualizarlas”, dado que es ilegal. Las organizaciones abocadas a las personas LGBTI afirmaron que, más bien, los familiares llevaban a las personas LGBTI a algún país vecino, donde en las clínicas al parecer se utilizaban tratamientos crueles, como la violación, para intentar cambiar la orientación sexual de las personas LGBTI

Estigma social de la infección por el VIH y el sida

Algunos activistas LGBTI comunicaron que durante los picos de la pandemia de COVID-19 en abril y mayo, las autoridades de hospitales públicos y privados bloquearon el acceso al tratamiento con retrovirales y hormonas a los pacientes LGBTI para centrar sus recursos en tratar los casos de COVID-19. Esta falta repentina afectó negativamente a las personas LGBTI que se encontraban tratamiento médico.

Sección 7. Derechos de los trabajadores

a. Libertad de asociación y derecho de negociación colectiva

La ley, con algunas excepciones, brinda a los trabajadores el derecho a formar sindicatos y afiliarse a los de su elección, llevar a cabo negociaciones colectivas y realizar huelgas lícitas. Además, prohíbe el despido de los miembros de sindicatos

desde el momento en que un sindicato notifica al inspector de trabajo de su asamblea general y hasta la formación de su primera junta ejecutiva, que son los primeros pasos legales en la constitución de un sindicato. Los empleadores no tienen obligación de reinstituír en sus puestos a los trabajadores despedidos por actividad sindical, pero deben efectuarles pagos por concepto de compensación y multa. Según un artículo publicado en abril de 2019 en *El Comercio*, el número de sindicatos públicos y privados inscritos ante el Ministerio del Trabajo había aumentado un 32% desde 2013. Los sindicatos y asociaciones laborales denunciaron dificultades para inscribir los sindicatos en el Ministerio del Trabajo por los requisitos excesivos y la escasez de personal en el ministerio.

Las empresas que despidan a los empleados que intentan formar un sindicato o a los miembros de sindicatos que ejercen sus derechos afrontan el pago de una multa equivalente al salario de un año para cada persona a la que se haya despedido indebidamente. Los trabajadores individuales que aún conservan el trabajo pueden presentar denuncias contra los empleadores ante la Inspectoría de Trabajo. Aquellos que ya no tienen trabajo pueden presentar denuncias ante los tribunales encargados de proteger los derechos laborales. Los sindicatos también pueden elevar reclamaciones ante una junta tripartita de arbitraje establecida para conocer esos casos. Estos trámites suelen sufrir grandes retrasos ya que el Ministerio del Trabajo sigue sin contar con personal especializado ni suficiente para atender todas las solicitudes de arbitraje y las apelaciones. Los representantes del sector privado alegaron que las juntas mostraban un sesgo consciente a favor de los empleados cuando se reunían.

Todos los empleadores particulares que tengan empleados afiliados a un sindicato están obligados a negociar colectivamente cuando el sindicato así lo pida. La ley exige un mínimo de 30 trabajadores para la formación de una asociación, un comité de trabajo o un sindicato, y no permite a los ciudadanos extranjeros ejercer cargos sindicales. En 2018, el Ministerio del Trabajo autorizó, mediante resoluciones ministeriales, ocho nuevos tipos de contratos de trabajo, con cláusulas específicas para los sectores pesquero, ganadero, de las flores, de la palma y de la construcción.

La ley protege el derecho de los empleados del sector privado a realizar huelgas en su propio nombre y a llevar a cabo huelgas o boicots de tres días por solidaridad en apoyo de otras industrias. Sin embargo, también establece que todos los conflictos laborales colectivos deben remitirse a tribunales de conciliación y arbitraje. En 2014 la Organización Internacional del Trabajo (OIT) instó al gobierno a enmendar esta disposición limitando ese arbitraje obligatorio a los casos en que ambas partes

convengan en el arbitraje y la huelga involucre a empleados públicos que ejercen autoridad en nombre del Estado o prestan servicios esenciales. Dado que esta medida requiere una reforma constitucional, a finales de año la disposición aún no se había modificado.

En la mayoría de los sectores la ley exige que transcurra un período de espera de 10 días desde la fecha en que se declaró una huelga, antes de que esta pueda llevarse a cabo. En el caso de los sectores agrícola y de hospitalidad, donde se necesitan trabajadores para brindar atención permanente, ese período de espera por ley es de 20 días desde la declaración de la huelga, y los trabajadores no pueden efectuar la toma de su lugar de trabajo. Durante ese período, los trabajadores y empleadores deben ponerse de acuerdo con respecto al número de trabajadores necesarios para asegurar un nivel mínimo de servicio, y por lo menos un 20% del personal debe seguir trabajando para prestar servicios esenciales. La ley determina la facultad del empleador de contratar personal sustitutivo solo cuando los trabajadores en huelga se nieguen a enviar el número de trabajadores requerido para prestar los servicios mínimos necesarios. En la práctica, contratar a personal sustitutivo es imposible, ya que la ley no prevé contratos de duración limitada, estacionales, por horas ni a tiempo parcial.

La ley prohíbe la formación de sindicatos y restringe el derecho a la negociación colectiva y a la huelga de los trabajadores del sector público en “sectores estratégicos”. Dichos sectores concentran a trabajadores de los sectores de salud, saneamiento ambiental, educación, justicia, bomberos, seguridad social, energía eléctrica, agua potable y alcantarillado, producción de hidrocarburos, procesamiento, transporte y distribución de combustibles, transporte público, servicio postal y telecomunicaciones. Algunos de los sectores definidos como estratégicos superan la norma de la OIT para servicios esenciales. Los trabajadores de estos sectores que intenten hacer huelga pueden arriesgarse a recibir cargos con penas de dos a cinco años de cárcel. El gobierno hizo cumplir la ley de manera efectiva.

Todos los sindicatos en el sector público se encuadran en la Confederación Nacional de Servidores Públicos de Ecuador. Si bien, en su gran mayoría, los trabajadores del sector público también estaban afiliados a una asociación del sector laboral, la ley no permite que dichas asociaciones hagan huelga ni participen en negociaciones colectivas. Una enmienda constitucional de 2015 especifica que solo el sector privado puede negociar colectivamente.

Varios sindicatos, asociaciones laborales y medios de comunicación denunciaron la presencia de vehículos militares y presunto acoso policial durante las huelgas de los empleados de la empresa local de explosivos Explocen desde el 13 de julio. La huelga comenzó después de que cinco empleados fueran supuestamente despedidos en junio sin recibir la debida indemnización. Los militares desplegaron vehículos para proteger la entrada a la fábrica de Explocen cuando comenzó la huelga y las autoridades declararon que la presencia militar era necesaria por el estado de emergencia nacional (consecuencia de la pandemia de COVID-19) y por la naturaleza altamente peligrosa de los materiales que se almacenaban y procesaban en la fábrica. Los abogados de los empleados y los sindicatos denunciaron la “militarización” de la protesta. El 13 de julio, la Defensoría del Pueblo exigió al Ministerio del Trabajo y Explocen que “dejaran de discriminar” y amenazar el derecho de huelga de los empleados. Al 27 de octubre, continuaban la huelga y la presencia militar.

El gobierno no hizo cumplir la legislación aplicable con eficacia, y las penas fueron proporcionales a las de otras leyes que implican la denegación de derechos civiles (como la discriminación). Los empleadores no siempre respetaron la libertad de asociación y el derecho a la negociación colectiva. Los sindicatos independientes tenían fuertes lazos con movimientos políticos.

b. Prohibición del trabajo forzoso u obligatorio

La ley prohíbe todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio, incluidas todas las formas de explotación laboral; trabajo infantil; adopción ilegal; matrimonio servil; y la venta de tejidos, fluidos y materiales genéticos de personas vivas. Las penas eran proporcionales a las de otros delitos graves análogos (como el secuestro).

El gobierno no hizo cumplir la ley con eficacia. La limitación de recursos, la escasa presencia en partes del país y lo inadecuado de los servicios para las víctimas redujeron la eficacia de la policía y los fiscales. Varias ONG y medios de prensa siguieron informando que menores de edad estaban siendo obligados a participar en actividades delictivas, particularmente el narcotráfico y el robo.

Persistieron los informes sobre menores de edad y mujeres obligados a realizar trabajos forzados (véase la sección 7.c.). Los observadores dieron parte con mucha más frecuencia de mujeres que eran víctimas de la trata con fines sexuales o que trabajaban en hogares particulares bajo condiciones que podrían equivaler a la trata de personas. La Policía Nacional informó que, al mes de agosto, había rescatado a 17 mujeres víctimas de trata sexual, detenido a 19 individuos involucrados en la

trata de personas y desmantelado una red internacional de explotación sexual. Al 17 de agosto, las cifras consolidadas del gobierno señalaban 42 víctimas de trata de personas (80% mujeres).

Los indígenas y los afroecuatorianos, al igual que los refugiados colombianos y los migrantes venezolanos (véase la sección 7.d.) fueron particularmente vulnerables a la trata de personas. Los tratantes a menudo reclutaban a niños de familias indígenas empobrecidas, bajo la falsa promesa de darles empleo, pero luego los obligaban a mendigar o a trabajar en situación de servidumbre doméstica, en talleres explotadores, o bien como vendedores callejeros o comerciales, en Ecuador o en otros países sudamericanos. Hombres, mujeres y niños sufrieron explotación en trabajos forzados y trata con fines sexuales en el extranjero, tal como en otros países sudamericanos y los Estados Unidos. Ecuador es un país de destino para mujeres y niñas sud y centroamericanas explotadas en la trata con fines sexuales, la servidumbre doméstica y la mendicidad forzosa.

Véase también el informe del Departamento de Estado sobre la trata de personas (*Trafficking in Persons Report*) en <https://www.state.gov/trafficking-in-persons-report/>.

c. Prohibición del trabajo infantil y edad mínima para trabajar

La ley prohíbe las peores formas de trabajo infantil. Establece que la edad mínima de trabajo para los menores de edad es la de 15 años para todo tipo de trabajo, y que el número máximo de horas que puede trabajar un menor es de seis horas por día, cinco días por semana. La ley exige que los empleadores de menores que no hayan terminado sus estudios primarios les den dos horas libres más para que puedan completar sus estudios. Asimismo, exige que los empleadores paguen a los menores los mismos salarios que perciben los adultos por el mismo tipo de trabajo, y prohíbe que los menores de menos de 18 años de edad trabajen en condiciones peligrosas e insalubres. Un acuerdo ministerial de 2015 enumera 27 actividades económicas calificadas como peligrosas e insalubres. Otras actividades ilegales, como la esclavitud, la prostitución, la pornografía y el narcotráfico, son punibles. La ley identifica el trabajo susceptible de perjudicar la salud, la seguridad o el estado de ánimo de los niños, como el trabajo en minas, vertederos de basura, mataderos, ganadería, pesca, textiles, talado de árboles, servicio doméstico y en todo ambiente laboral que requiera una exposición a sustancias tóxicas o peligrosas, polvo, maquinaria peligrosa o ruidos fuertes.

La ley establece sanciones por violaciones a las leyes sobre trabajo infantil, incluidas multas y clausura del establecimiento en cuestión. Las penas no fueron proporcionales a las de otros delitos graves análogos (como el secuestro). Si un empleador comete una segunda infracción en materia de trabajo infantil, los inspectores pueden cerrar el negocio temporalmente. La ley autoriza a los inspectores laborales a realizar inspecciones en fábricas, talleres y cualquier otro lugar cuando lo consideren apropiado o cuando un empleador o un trabajador lo solicite. La pandemia de COVID-19 provocó una moratoria parcial de las inspecciones laborales, aunque se siguieron realizando algunas. Al 27 de octubre, no se disponía de estadísticas sobre las inspecciones realizadas durante el año.

El gobierno no hizo cumplir la ley eficazmente. Los ministerios del Trabajo y de Inclusión Económica y Social, las juntas de protección de derechos y los tribunales de menores son responsables de hacer cumplir las leyes sobre trabajo infantil.

En un informe publicado en enero de 2019 por el Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional, organismo gubernamental, se indicó que las provincias de Bolívar, Chimborazo y Cotopaxi eran las que tenían las tasas de trabajo infantil más elevadas de niños de entre cinco y 14 años. Una encuesta de 2017 sobre empleo y subempleo reveló que el 3% de los niños de cinco a 11 años y el 10,6% de los niños de 12 a 14 años trabajaban. Además, reveló que era más probable encontrar niños trabajadores en las zonas rurales, en particular en los sectores agrícola y ganadero. Si bien en 2017 el gobierno realizó dos encuestas que contenían algo de información sobre el trabajo infantil, desde 2012 no ha realizado ninguna sobre el tema a nivel nacional. Autoridades del gobierno, sindicatos y la sociedad civil coincidieron en que la falta de estadísticas actualizadas obstaculizaba las acciones dirigidas a erradicar el trabajo infantil.

Varias organizaciones laborales y ONG informaron que no se disponía de datos fiables sobre el trabajo infantil en los sectores de empleo formal debido a la pandemia de COVID-19. Según estos grupos, incluso antes de la pandemia, las medidas de austeridad impulsadas por el gobierno afectaron el programa de erradicación del trabajo infantil del Ministerio del Trabajo, por lo que el número de inspecciones gubernamentales disminuyó.

El gobierno tampoco hizo cumplir eficazmente las leyes sobre trabajo infantil en el sector informal. Es probable que la pandemia de COVID-19 haya incrementado el trabajo infantil en el sector informal, ya que las encuestas y los estudios de las ONG revelaron un aumento en la cantidad de niños que ayudan en empresas familiares y que, de lo contrario, asistirían a la escuela. El empeoramiento de la

situación económica nacional y el cierre de escuelas en todo el país provocado por la pandemia exacerbaron aún más esta tendencia. La actividad económica informal más común era cocinar comidas caseras y venderlas en la calle o entregarlas a los clientes. Según *CARE International*, lo más probable es que los niños de zonas rurales trabajaran en granjas o empresas familiares, como los establecimientos de cultivo de rosas y plantaciones bananeras.

Como la pandemia de COVID-19 provocó el cierre de escuelas en todo el país, más padres se vieron obligados a llevar a sus hijos a los campos agrícolas mientras los padres trabajaban. Las organizaciones laborales informaron que, por lo general, los niños no realizaban los trabajos más pesados o peligrosos. En las zonas urbanas, muchos niños de menos de 15 años trabajaban de manera informal como vendedores ambulantes, lustrabotas, mendigos o clasificando residuos para conseguir su propio sustento o complementar los ingresos familiares.

Organizaciones de la sociedad civil locales informaron que había menores que realizaban trabajos domésticos, incluso remunerados. Un estudio realizado en julio por *CARE International* reveló que durante la pandemia muchas limpiadoras domésticas llevaban a sus hijos, en su mayoría niñas, al trabajo para que ayudaran en las tareas domésticas de la madre, lo que probablemente aumentó el trabajo infantil en el entorno doméstico.

Véase también el informe del Departamento de Trabajo, Conclusiones sobre las peores formas de trabajo infantil (*Findings on the Worst Forms of Child Labor*) en <https://www.dol.gov/agencies/ilab/resources/reports/child-labor/findings>.

d. Discriminación con respecto al empleo o la ocupación

La ley y los reglamentos prohíben la discriminación por motivos de raza, sexo, género, discapacidad, idioma, orientación sexual o identidad de género, estado serológico positivo del VIH u otras enfermedades contagiosas, o condición social. Asimismo, está prohibido por ley que los empleadores apliquen criterios discriminatorios en la contratación, discriminen contra los sindicatos y tomen represalias contra los trabajadores huelguistas y sus dirigentes. El gobierno no aplicó estas leyes y reglamentos con eficacia, pero las sanciones fueron equiparables a las de otras leyes en materia de derechos civiles, como la interferencia electoral.

Existe una discriminación generalizada con respecto al empleo de las mujeres, particularmente en lo relativo a oportunidades económicas para las de más edad y

las provenientes de los estratos económicos más bajos. En 2018 la Asamblea Nacional aprobó una serie de reformas laborales para los empleados en los sectores público y privado con la finalidad prevenir el hostigamiento en el lugar de trabajo.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) anunció que la tasa de desempleo en junio fue del 15,7% para las mujeres y del 11,6% para los hombres, en comparación con el 5,5% y el 3,7%, respectivamente, en junio de 2019. Aunque el INEC no dio a conocer más información de empleo desglosada por género, los analistas económicos destacaron que las mujeres se vieron afectadas de manera desproporcionada en algunos de los sectores más golpeados por el distanciamiento social y las medidas de reducción de horas de trabajo, como el turismo, la floricultura y el servicio doméstico.

Una asociación laboral informó que el personal sanitario femenino de los hospitales públicos de todo el país disponía de insumos médicos y equipo de protección del tamaño incorrecto para tratar a los pacientes diagnosticados con COVID-19, ya que la mayoría se conseguía en tallas de hombre, aunque las mujeres representaban casi dos tercios de los trabajadores de los servicios sociales y sanitarios.

Los afroecuatorianos siguieron exigiendo más oportunidades en la fuerza laboral y se quejaron de que los empleadores a menudo los prejuizaban caracterizándolos con base en las fotografías que acompañaban sus solicitudes de empleo y estereotipos raciales. Al concluir una visita oficial al país en diciembre de 2019, el Grupo de Trabajo de Expertos de las Naciones Unidas sobre los Afrodescendientes expresó su preocupación por las denuncias de impunidad y de abusos y violaciones de los derechos humanos que sufrían los trabajadores agrícolas, la mayoría de ellos afrodescendientes, en las plantaciones de banana de la filial japonesa Furukawa Plantations C.A. El Grupo de Trabajo también se mostró preocupado por “la falta de acceso a la justicia de las personas de ascendencia africana” que exigían reparación por el daño sufrido en el trabajo agrícola, y acogió con satisfacción el compromiso de la Corte Constitucional de abordar los casos pendientes contra empleadores agrícolas. Las personas indígenas y LGBTI, así como las personas con discapacidades, también sufrían discriminación laboral.

e. Condiciones de trabajo aceptables

La ley estipula la determinación de un salario mensual mínimo, que estuvo por encima del umbral de pobreza.

La ley limita el período habitual de trabajo a una semana laboral de 40 horas, ocho horas por día, con dos días consecutivos de descanso semanal. Para los mineros, la jornada laboral tiene un máximo de seis horas por día, y solo pueden trabajar una hora extra por día con pago extraordinario por dicha hora. Se paga un 50% adicional al salario base por el trabajo realizado entre las 6 de la mañana y la medianoche. El trabajo realizado entre la medianoche y las 6 de la mañana recibe el doble del salario base, aunque los trabajadores cuyo turno estándar es el nocturno reciben en cambio una prima del 25%. El pago extraordinario también se aplica a trabajos realizados los fines de semana y días feriados. El máximo número de horas extra es de cuatro horas diarias y un total de 12 por semana. Se prohíben las horas extra obligatorias. El gobierno no aplicó con eficacia las leyes sobre salario mínimo y horas extra pero las sanciones son proporcionales a las de delitos similares, como el fraude. Los trabajadores tienen derecho a 15 días seguidos de vacaciones por año, fines de semana incluidos, número al cual se agrega un día más por año de servicio después de los cinco años de antigüedad. Para los empleados domésticos que residen donde trabajan rigen otras reglas de horario y vacaciones. La ley dispone penas de cárcel para los empleadores que no cumplan con el requisito de inscribir a sus empleados domésticos en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Los datos del INEC mostraron que la tasa de “empleo suficiente” (la proporción de la población que trabaja por lo menos 40 horas a la semana o que gana un salario mínimo de 400 dólares al mes) cayó a un mínimo histórico del 16,7% hasta el mes de junio y la “tasa de subempleo” se duplicó desde diciembre de 2019 hasta alcanzar el 34,5%.

El 22 de junio entró en vigor una ley para hacer frente al impacto de la COVID-19 que incluye disposiciones que permiten que empleadores y empleados suscriban acuerdos de fuerza mayor, aunque solo se permite despedir a un empleado si la empresa deja de funcionar de forma permanente. La ley también permite que los empleadores reduzcan la jornada laboral y los salarios hasta un 50% y un 45%, respectivamente, mediante la firma de “contratos de emergencia” con sus empleados para evitar la pérdida de puestos de trabajo. Citando cifras oficiales, los medios de comunicación informaron que, hasta el 20 de agosto, 671 empresas habían inscrito a 5.971 trabajadores bajo “contratos de emergencia”, la mayoría de ellos en los sectores de la agricultura, la ganadería, la manufactura y el comercio. Los sindicatos y las organizaciones sindicales afirmaron que la nueva ley permitía condiciones de trabajo precarias, reducía los salarios por debajo del mínimo y permitía los despidos improcedentes sin la debida indemnización por la influencia de los empleadores sobre los empleados desesperados por conservar el trabajo durante la desaceleración económica consecuencia de la COVID-19.

La nueva ley facilita y fomenta las opciones de teletrabajo, incluido el derecho del trabajador a “desconectarse” de sus obligaciones laborales durante un mínimo de 12 horas continuas en un período de 24 horas. El 23 de julio, el ministro de Trabajo afirmó que más de 430.000 personas de los sectores público y privado trabajaban a distancia.

La ley protege la salud y seguridad de los trabajadores y contempla normas de salud y seguridad ocupacionales (OSH), que están actualizadas y son adecuadas para las principales industrias del país. Estos reglamentos y normas no se aplicaban en el sector informal, que empleaba al 46,7% de la población activa antes de la pandemia de COVID-19. El número de inspectores era insuficiente y el gobierno no aplicaba eficazmente las leyes de OSH.

Las autoridades pueden realizar inspecciones laborales con cita previa o tras la denuncia de un trabajador. Si un trabajador solicita una inspección y un inspector del Ministerio del Trabajo confirma la existencia de un riesgo en el lugar de trabajo, puede clausurar ese lugar. Por lo general, las inspecciones laborales se realizaron debido a denuncias, no como medida preventiva, y los inspectores no pudieron realizar visitas sin aviso previo. La pandemia de COVID-19 entorpeció la realización de inspecciones *in situ* por las medidas de distanciamiento social y las limitaciones presupuestarias del Ministerio del Trabajo. Si bien hubo casos en que las infracciones se subsanaron, otros casos estuvieron sujetos a impugnaciones legales que demoraron por meses la realización de cambios. Las sanciones no fueron suficientes para disuadir la comisión de infracciones y a menudo no se hicieron cumplir.

Algunos sindicatos y asociaciones laborales alegaron que los empleadores de los sectores público y privado a veces no aplicaban los protocolos de bioseguridad ni proporcionaban el equipo de protección adecuado para evitar contagiarse de COVID-19.

El Ministerio del Trabajo prosiguió sus reformas aumentando el número de trabajadores amparados por contratos, normas de salario mínimo e inscripción para recibir beneficios de seguridad social.

La mayoría de los trabajadores trabajaban en el amplio sector informal y en las zonas rurales. No estaban sujetos a las leyes de salario mínimo ni a las prestaciones que contempla la ley. Los problemas de OSH predominaron más en dicho sector. Si bien la ley pone de relieve la salud y la seguridad de los mineros, el gobierno no hizo cumplir las normas de seguridad en las minas informales de pequeña escala (a

menudo ilegales y con lazos a dirigentes comunitarios locales y a la delincuencia organizada), que constituyen la gran mayoría de las empresas del sector minero. Los migrantes y refugiados estuvieron particularmente expuestos a condiciones de trabajo peligrosas y de explotación. Según algunos medios de comunicación y asociaciones laborales, algunas organizaciones locales dieron cuenta de reclamos de venezolanos que recibían un salario inferior al mínimo, especialmente en el sector informal.

Por lo general, los trabajadores del sector formal podían retirarse de situaciones que ponían en peligro su salud o seguridad, sin poner en riesgo su empleo, y las autoridades protegieron eficazmente a los empleados en esta situación. Sin embargo, los representantes de los trabajadores afirmaron que la COVID-19 complicaba estas protecciones, ya que los empleados y sus empleadores a veces tenían una impresión contradictoria del grado de riesgo que suponía presentarse a trabajar y el alcance de las medidas de protección en el trabajo, mientras que los empleados temían perder el empleo ante una recesión económica. Los trabajadores del sector informal gozaron de un nivel mucho menor de protecciones laborales, y también tuvieron menos posibilidades de retirarse de situaciones de peligro para su salud o seguridad sin riesgo alguno de pérdida de su empleo.